

En defensa de Maastricht

JORDI SEVILLA

EL PAÍS - Opinión - 17-06-1997

Las propuestas del nuevo Gobierno francés, con posible apoyo británico, para introducir la preocupación por el empleo y reequilibrar la aproximación que se estaba haciendo hacia la unión económica y monetaria devuelven al Tratado de Maastricht su sentido original, sin cuestionarlo como pretenden algunos. La decisión de crear una moneda única en la Unión Europea que sustituyera a las 15 existentes hoy no fue una decisión improvisada ni representa un salto en el vacío respecto al elevado nivel de integración económica ya alcanzado por los países que conforman la Unión. Tampoco podemos decir que la sustitución de las monedas nacionales por el euro sea un asunto de trámite. De acuerdo. Pero, ¿por qué genera, de tanto en tanto, oleadas de incertidumbre, malestar e incluso rechazo? Creo que algunos hechos objetivos, unidos a ciertos errores por parte de los Gobiernos, ayudarían a explicarlo.

Las consecuencias para Europa de la existencia de una moneda única son cualitativamente distintas a cualquier otro paso previo de integración, fundamentalmente porque visualiza ante todos los europeos el alto nivel y la irreversibilidad alcanzados por la integración de nuestras economías. El cambio de la peseta o el franco por el euro hace consciente a todo el mundo de hasta qué punto somos una parte de un todo. Se puede decir que el euro introduce la globalización de la economía en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y a casi nadie le gusta ser consciente de que su destino lo determinan fuerzas impersonales.

El segundo hecho objetivo es el cambio de ciclo económico experimentado desde el momento en que se firma el tratado en 1991 y cuando se empiezan a aplicar las políticas de convergencia requeridas para cumplirlo. La crisis de 1992-1993 y el crecimiento triste en que se desenvuelve la actividad económica en Europa desde entonces, incapaz de absorber una alta tasa de paro, hace que para muchos ciudadanos exista una aparente contradicción entre el ajuste a realizar para satisfacer los criterios de convergencia y la política económica necesaria para salir del bache, creando empleo.

Los esfuerzos y sacrificios -sobre todo en el ámbito presupuestario- necesarios para cumplir con Maastricht serían menores y se soportarían mejor si atravesáramos una fase alcista de crecimiento que fuera reduciendo paulatinamente las tasas de paro. Pero no sólo es ésa la situación general de Europa, sino que hay elementos para pensar que las políticas de convergencia, tal y como se están aplicando, están teniendo efectos depresivos sobre la actividad, contribuyendo a agravar el problema en vez de a resolverlo. Este punto admite mucha discusión. Pero lo cierto es que los ciudadanos perciben que, en nombre de la moneda única, sus autoridades ofrecen una respuesta distinta a las tradicionales cuando había un incremento del paro o una atonía en la actividad económica.

La cuestión defendo puede no tener nada que ver con los criterios de convergencia ni con el euro, pero ante la opinión pública aparecen como vinculados, en parte por la presentación que han hecho los Gobiernos. Las medidas incorporadas en las políticas de convergencia las tendríamos que hacer, con Maastricht o sin él. Pero al descargar los Gobiernos parte de sus responsabilidades al adoptarlas en una especie de compromiso imperativo externo como son las exigencias de la moneda única, también han desplazado hacia ésta el grueso de las críticas, generando la falsa ilusión de que, sin euro, no harían falta esos sacrificios que nos están vendiendo en su nombre.

Digámoslo con claridad: si mañana desapareciera el proyecto de crear una unión monetaria, mediante un aplazamiento indefinido de los compromisos de Maastricht, no por ello se resolverían los problemas existentes hoy en Europa para crecer y crear empleo suficiente, o para mantener, sin profundas transformaciones, nuestro Estado de bienestar. Es más, a estas alturas del proceso se provocarían de nuevo tormentas monetarias en los mercados de divisas y valores que, al menos para la mayoría de países europeos, haría todavía más difícil el encontrar una solución a los mismos. Si el proyecto del euro fuera el responsable de los 18 millones de parados que existen en Europa haríamos bien en cancelarlo. Pero no es así. La estructura productiva europea y su modelo social tienen problemas -que se reflejan en alta tasa de paro- que no se resuelven con políticas contrarias a las definidas en Maastricht para introducir la moneda única, aunque la forma concreta de aproximación a los criterios de convergencia, que se ha impuesto tras la crisis de 1992-1993, haya obligado a desplazar algunas de las medidas de crecimiento a largo plazo.

Los Gobiernos europeos han cometido también otros errores de procedimiento en su aproximación a la moneda única que ahora se les pueden estar volviendo en contra. En primer lugar, con la insistencia en una interpretación estricta del criterio de déficit público. ¿Es que una unión monetaria funciona perfectamente con el 3% de déficit y no con, digamos, el 3,5% temporal en algunos países? ¿No importa más la tendencia a la reducción hasta aproximarse suficientemente a la cifra de referencia que el dígito concreto? Parece que sí, y así lo entendieron los redactores del Tratado de Maastricht al hablar del asunto en el protocolo correspondiente. Tanto desde un punto de vista jurídico como económico, parece claro que una cierta flexibilidad interpretativa en el criterio de déficit público es acorde con la letra del tratado y, desde luego, con su espíritu, que nunca pretendió que la formación de la unión monetaria fuera algo automático y técnico, sin ningún margen para la decisión política. Es decir, interpretativa.

El segundo error procedimental cometido por los Gobiernos ha sido presentar el avance hacia la moneda única como un proceso autónomo, alejado del resto de problemas económicos y, en especial, del empleo. La falta de entidad suficiente de las políticas conjuntas de crecimiento o los planes europeos de creación de empleo o las críticas injustificadas sobre los fondos estructurales y de cohesión han contribuido decisivamente a una interpretación monetarista, enfrentada a lo que serían las auténticas preocupaciones de los ciudadanos. Ha habido mucha unión monetaria y poca unión económica cuando en el tratado se hablaba de constituir una unión económica y monetaria. Pero de ese desequilibrio no es culpable el euro. El protagonismo casi exclusivo de la moneda única en menoscabo de otras políticas europeas más preocupadas por estimular el crecimiento y la creación de empleo ha sido un error de los distintos Gobiernos, que se ha traducido, ante la opinión pública, como un antagonismo entre euro y empleo.

Reforzar las políticas sociales y de empleo con ámbito comunitario no es incompatible con la unión monetaria e incrementaría el apoyo social al proceso en su conjunto. Así parece haberlo entendido el nuevo Gobierno francés cuando, aceptando los criterios, los plazos, e incluso el pacto de estabilidad -lo que debería haber tranquilizado a los mercados financieros-, ha pedido un reequilibrio en favor de políticas de empleo y un mayor peso a una autoridad económica en la Unión -y no sólo monetaria-. Precisamente ésta es una interpretación en defensa del Tratado de Maastricht, aunque vaya en contra de la versión cicatera que del mismo se ha ido imponiendo hasta la fecha.